

Globethics Repository



Argentina

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Novaro, Marcos
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-12 18:48:53
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/219198

Argentina

De cara a un doble desafío

Marcos Novaro

Muchos de los análisis sobre la vida política argentina en la última década han puesto el acento en los desequilibrios institucionales que resultaron de la gestión «hiperpresidencialista», y en el debilitamiento de los partidos por obra de la personalización e informalización políticas. Sin pretender negar estos problemas, se ofrece una perspectiva algo más optimista respecto de la suerte de los partidos y las instituciones republicanas. Se discuten las posibilidades de que unos y otras salgan airoso de los desafíos actuales, cuyo desenlace se conocerá en los últimos meses de 1999: la sucesión en el liderazgo peronista y la alternancia en el poder a través de mecanismos democráticos.

El régimen político argentino se enfrenta en este momento a lo que puede ser un doble y decisivo test respecto de su solidez: la posible alternancia, en el Ejecutivo, de un gobierno peronista a otro de signo distinto, y la sucesión en el liderazgo del peronismo. Si bien el cambio presidencial de 1989, cuando el radical Raúl Alfonsín entregó el mando a Carlos Menem, implicó un paso significativo hacia la consolidación democrática, más aun considerando que en la historia de este siglo nunca se había producido un hecho comparable, el problema de la alternancia permanece en parte irresuelto (Cheresky). Primero porque la transferencia fue irregular (se adelantó el traspaso del mando a raíz de la crisis hiperinflacionaria) en gran medida, precisamente, por la incertidumbre que generó el mismo cambio de gobierno. En segundo lugar, porque no se satisface aún el test democrático que adeuda el peronismo: su disposición a aceptar desde el poder una derrota en una elección presidencial y abandonar el Gobierno sin poner en riesgo la estabilidad institucional. Y lo mismo cabe decir de la sucesión del liderazgo

MARCOS NOVARO: profesor adjunto de teoría política contemporánea en la UBA e investigador del Conicet; autor, entre otros trabajos, de los libros *Pilotos de tormenta*, *Política y poder en el gobierno de Menem* y *Los caminos de la centroizquierda* (estos dos últimos en colaboración con Vicente Palermo); recientemente concluyó su tesis de doctorado, titulada «Representación, identidades y liderazgos».

Palabras clave: sistema político, institucionalización, elecciones, peronismo, Argentina.

dentro del propio Partido Justicialista (PJ): el liderazgo debe demostrar todavía que puede aceptar su reemplazo. Es que jamás un presidente peronista en ejercicio entregó el poder partidario a otro líder, o el gobierno a otro presidente electo democráticamente, peronista o de otra fuerza: Perón fue reelegido en 1951, y tras ser derrocado por un golpe militar en 1955, proscripto, repatriado y reelegido en 1973, murió estando al frente del partido y del gobierno; en tanto que Menem logró su reelección en 1995 y hasta el día de hoy conserva las riendas del partido.

No es menor, por lo tanto, el desafío que tienen las instituciones y los actores políticos: deben procesar los conflictos que supone para el actual presidente (y también para su entorno más inmediato) resignarse a abandonar el poder, sea en manos del candidato presidencial del PJ, Eduardo Duhalde, gobernador de la provincia de Buenos Aires, sea en las de Fernando de la Rúa, candidato de la Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia, coalición que se formó en agosto de 1997 con la Unión Cívica Radical (UCR), el otro partido tradicional argentino, y el Frente por un País Solidario (Frepaso), confederación de fuerzas de centroizquierda surgida a mediados de los años 90. Dado que la Alianza, luego de vencer al PJ en las elecciones parlamentarias de octubre de 1997 (interrumpiendo 10 años de predominio justicialista) encabeza las encuestas preelectorales en estos momentos, y hasta ahora ha sido imposible para los dos caudillos peronistas llegar a un acuerdo respecto de los espacios de poder y los roles de cada uno en el futuro, se entiende que la incertidumbre que despiertan la alternancia y la sucesión sea considerable.

La partidización del peronismo

Podría decirse que es «natural» que una fuerza como el peronismo, sumamente verticalista y personalista desde su nacimiento, unida y activa en buena medida desde el gobierno, gracias al control de los recursos del Estado, encuentre que la sucesión de su líder, y más aún la alternancia en el poder, conllevan amenazas a su unidad e incluso a su supervivencia. En consecuencia, sería también natural que adoptara comportamientos reactivos, incluso antiinstitucionales, orientados a aventar esos peligros.

Sin embargo, desmintiendo esta visión «pesimista» sobre el problema, encontramos que el PJ está resolviendo el trance en mejores términos que lo esperado. En esto sin duda ha actuado como elemento facilitador la experiencia que indica que puede sobrevivir fuera del gobierno, en el cuadro de un régimen constitucional en funcionamiento (como sucedió entre 1983 y 1989). Esta experiencia histórica con que cuenta la dirigencia peronista, que no posee, por caso, la del Partido Revolucionario Institucional mexicano (para el cual la alternancia sería el fin de su condición absolutamente esencial de «partido-Estado») genera una disposición a procesar de manera pacífica esta prueba. Junto con ello debe tenerse en cuenta la institucionalización partidaria del peronismo, ocurrida en los últimos 10 años, que ha sido decisiva para moderar los conflictos internos y frenar desbordes institucionales, al

condicionar la lealtad de los dirigentes hacia los líderes en función de apuestas estratégicas de largo aliento y cálculos prudenciales de los costos que podrían acarrear una excesiva personalización y el avasallamiento de las reglas. El desenlace de la puja entre Menem y Duhalde es elocuente en este sentido y merece, por tanto, una consideración detenida. Aunque, aclaremos desde ya, no responde sólo a la lógica partidista que se impone en el peronismo y al constreñimiento institucional a ella asociado, sino también al contundente rechazo de la ciudadanía y de la oposición a los arrebatos anticonstitucionales del presidente.

Nuestro relato comienza con la derrota sufrida por Duhalde en su distrito en las elecciones de 1997. Este resultado animó al sector menemista del peronismo a lanzarse a una nueva reelección presidencial en 1999; algo que hasta entonces se había barajado sobre todo como una amenaza contra el gobernador bonaerense para forzarlo a negociar cuotas de poder en el futuro gobierno y en el PJ. Pero después de aquellas elecciones, con el argumento de que sólo Menem podía enfrentar a la Alianza y evitar la de otro modo segura derrota, se apostaba a que el peronismo se volviera a encolumnar detrás del presidente para hacer realidad sus sueños. Duhalde había ido consolidando su carrera presidencial sobre la base de un firme control del PJ bonaerense, de la bancada de diputados nacionales, y del Congreso Nacional del partido. Y aunque Menem usó hábilmente la «liga de gobernadores peronistas» (a través del manejo discrecional de los aportes del tesoro nacional a las provincias, entre otros medios) como arma de contención contra la extensión del poder de Duhalde a todo el país, evitando que se convirtiera de forma anticipada en su «sucesor natural», no pudo evitar que, reservadamente, éste sellara acuerdos con varios de sus pares (el más importante, sin duda, con Carlos Reutemann, líder santafesino que comenzó a recibir partidas del Fondo del Conurbano Bonaerense). Algo parecido sucedía con parte importante del sindicalismo peronista, que no quería enemistarse con Menem, pero trataba de congraciarse con quien tenía más chances de sucederlo. En los días que siguieron a la fatídica elección, Duhalde vio que el poder interno que había construido pacientemente en los años anteriores se disolvía como arena entre sus dedos, y que sus aliados e incluso algunos de sus más cercanos colaboradores (entre otros, Alberto Pierri, presidente de la Cámara Baja), se pasaban con armas y bagajes al bando reeleccionista.

Aunque tampoco éste las tenía todas consigo. Debía remover una expresa prohibición constitucional (establecida en la misma Convención Constituyente de 1994 que habilitó la primera reelección de Menem) a la aspiración del presidente a un tercer periodo consecutivo. Por otra parte, las encuestas no alentaban a los peronistas a ser mucho más optimistas con Menem como candidato que con Duhalde, o con algún otro¹. De todos modos, se buscó ava-

1. Aunque desde octubre de 1997 Duhalde venía cayendo en las encuestas, el presidente no repuntaba. Seguía clavado en un escaso 15% de imagen positiva, en un clima de opinión que era desfavorable en todos los frentes para su gobierno. Esta situación llevó a Menem a promocionar a otros posibles candidatos, como Carlos Reutemann y Ramón «Palito» Ortega.

lar el proyecto entre los grupos empresarios y en las embajadas, y se incentivó a los dirigentes partidarios y sindicales a manifestar activamente su apoyo. Para remover lo que llamaban los «obstáculos constitucionales», dado que una nueva reforma en la práctica era imposible, se iba a buscar que la mayoría oficialista de la Corte Suprema declarara inconstitucional la cláusula referida a la cuestión. Para ello, dirigentes de varias provincias presentaron recursos judiciales contra «la proscripción del presidente». Finalmente Menem se propuso recuperar el control del Congreso del PJ para ser proclamado candidato, lo que se convertiría en una contundente demostración de fuerza.

Sin embargo, en ninguno de estos terrenos el Gobierno logró hacer que las cosas se acomodaran a sus deseos, y el rompecabezas se transformó en una acumulación de conflictos y dificultades. La Alianza se pronunció en contra de cualquier intento de manipular la Constitución, respaldada por sondeos de opinión que mostraban, desde 1997 y 1998, más de un 80% de rechazo a la re-reelección y a la candidatura de Menem. Las opiniones empresarias se dividieron entre los apoyos tibios al presidente («si la Constitución lo permitiera sería un buen candidato»), el silencio y rechazos más o menos explícitos, mientras en la embajada norteamericana se optó por una reserva teñida de cierta dosis de preocupación. A diferencia de lo sucedido en 1993 y 1994, cuando el temor a una recaída inflacionaria o al retroceso en el programa de reformas jugaron a favor de la reelección, ahora la posibilidad de que Duhalde o un candidato de la Alianza llegara al gobierno no generaba alarma, pero sí la perspectiva de un conflicto de poderes y una aguda crisis institucional motivadas por la estrategia menemista. En esta situación, los jueces de la Corte, aun algunos cercanos al menemismo, dudaron de tomar cartas en el asunto. La Alianza amenazaba con iniciar un juicio político a quienes avalaran con su voto un planteo que contradecía la letra y el espíritu de la Constitución, los diputados duhaldistas enviaban señales de que acompañarían ese recurso, y después de todo podría suceder que el presidente desistiera, aun contando con el aval de la justicia, dada la escasa adhesión a su figura y la amplia ventaja de la oposición en todas las encuestas. Es necesario destacar, además, que había comenzado a cambiar el ánimo con que muchos miembros del Poder Judicial trataban las causas que involucraban intereses del Gobierno (por ejemplo, varias investigaciones sobre casos de corrupción fueron imprevistamente activadas) en vista del posible triunfo de la Alianza en 1999. Al final, los jueces menemistas de la Corte prefirieron esperar a que la batalla por la re-reelección se definiera en la interna del PJ. Y allí las cosas no fueron mejor para el menemismo.

El sector menemista parecía haber logrado, tras la derrota de Duhalde, recuperar el terreno perdido en el plano interno desde 1995, volcando nuevamente en su favor a la gran mayoría de los gobernadores y sindicalistas, acorralando al gobernador bonaerense en su distrito. Incluso Menem logró meter cuñas en el hasta entonces monolítico peronismo de la provincia de Buenos Aires, por la defección de algunos caudillos duhaldistas (como Alberto Pierri y Fernando Galmarini). Todo parecía anunciar el desbande de las huestes de

quien había osado desafiar al líder supremo. Pero Duhalde no se dio por vencido. Primero, convocó a un plebiscito en su provincia para consultar la opinión sobre la re-reelección, con el obvio objetivo de debilitar la estrategia de Menem infligiéndole una aplastante derrota. Este recurso plebiscitario había sido considerado por los aliancistas, pero finalmente lo descartaron por el temor a aglutinar al peronismo en su contra, forzar la intervención de la Corte Suprema y ser además inconsistentes con su propio planteo de respeto de la Constitución. Duhalde no tenía nada que perder y no se detuvo ante consideraciones procedimentales. Desde su punto de vista era válido echar mano de este instrumento pues su adversario no se caracterizaba por cuidar las formas. En términos pragmáticos su decisión fue, además, acertada pues colocó al menemismo a la defensiva. Segundo, Duhalde se negó a participar de la reunión del Congreso del partido (convocada en julio de 1998), donde el presidente esperaba obtener un respaldo contundente. Con ello logró que el cónclave fracasara parcialmente. A pesar de las triquiñuelas en la acreditación de los congresistas, el menemismo no pudo reunir una mayoría holgada, muy pocos representantes bonaerenses asistieron y para colmo se retiraron los de Santa Fe, instruidos por Reutemann, en disconformidad con el cariz que estaban tomando los acontecimientos. El líder santafesino hizo además explícitos los temores que compartían muchos dirigentes peronistas: el partido podía colapsar a raíz de esta disputa y ya no tendría importancia quién venciera en ella, porque el resultado de las elecciones de 1999 sería desastroso para todos.

Esta sesión partidaria fue el momento decisivo de la lucha por la sucesión del liderazgo peronista. Pocos días después Menem anunció que abandonaba sus aspiraciones para 1999 (aunque no las de seguir presidiendo el PJ) y las encuestas mostraron que Duhalde volvía a ser entre los peronistas el favorito para sucederlo. Desde entonces la confrontación siguió siendo intensa, pero se concentró en la conducción del partido (desde donde Menem podría condicionar a un gobierno duhaldista, o liderar la oposición a uno de la Alianza); es decir, se hizo más intrapartidaria. A principios de 1999 hubo un último intento reeleccionista, con un alcance más limitado y un resultado aun más desfavorable para Menem: Ramón Ortega, hasta entonces delfín del presidente y posible candidato sustituto del menemismo, pasó a ocupar el segundo término en la fórmula duhaldista, y casi todos los gobernadores tomaron distancia de la estrategia menemista y declararon, con más o menos entusiasmo según el caso, su apoyo a esa dupla.

Cabe pensar que el saldo de este enfrentamiento es ambiguo, porque si bien se evitó la violación de las normas constitucionales que limitan el ejercicio del poder y la ruptura de las reglas partidarias, o la fractura del PJ, ello se logró sobre la base de recursos plebiscitarios (en concreto, la amenaza del plebiscito bonaerense) y en la puja interna del partido oficial. Si la Alianza hubiera sido más efectiva para movilizar el rechazo de la opinión pública al proyecto presidencial o, sobre todo, si éste se hubiera frustrado por la intervención de los mecanismos y reaseguros institucionales correspondientes, se

podría afirmar sin duda que el sistema había sorteado airoso la más exigente prueba de su solidez. Ello no fue lo que sucedió, en parte porque los mecanismos institucionales demostraron no ser suficientes, y ni siquiera muy confiables (al menos en lo que toca a la Corte Suprema), y en parte porque el ánimo ciudadano expresó más que una adhesión incondicional a las normas, disponible para ser movilizada políticamente, el rechazo circunstancial a la figura del actual presidente. Con todo, puede decirse que esta experiencia significó un importante aprendizaje para los actores involucrados, y puso en el tapete la fuerza de los constreñimientos a los que somete a los líderes la competencia inter e intrapartidaria, en un escenario en cuyo horizonte existe la posibilidad concreta y cercana de la sucesión de los liderazgos en los partidos y de la alternancia de las fuerzas en el poder.

Es cierto también que la oposición interna al presidente recurrió al imaginario populista tradicional (movimientismo antipartidario, concepción mayoritaria y plebiscitaria de la democracia, etc.) en tanto seña de identidad y bandera del rechazo al neoliberalismo y el disciplinamiento impuestos «desde arriba» por el menemismo. Bien podría interpretarse, por lo tanto, el desenlace del careo como una victoria del movimiento sobre el partido, y un resurgir del populismo. Así parece haberlo deducido el propio Duhalde, que usó su diferenciación respecto de Menem para intentar disputarle el voto opositor a la Alianza. Sin embargo las posibilidades de que Duhalde pueda «desmenemizar» totalmente al peronismo (aun desde la presidencia de la República), y de que el PJ pueda superar los clivajes electorales actuando como gobierno y oposición a la vez, son escasas. Duhalde recuperó parte del terreno perdido desde 1997: los sondeos de comienzos de 1999 lo mostraron acortando distancias con la Alianza, hasta que en el mes de mayo se le puso a la par: reunía 30% de las preferencias contra 32% de la coalición UCR-Frepaso (Encuesta de MORI). Pero no avanzó más allá, y el perfil de sus votantes es, al menos hasta ahora, predominantemente oficialista, no opositor.

Una cosa es que la oposición interna encabezada por Duhalde haya hecho de la reivindicación de las tradiciones populistas del peronismo y de un programa diferenciado de las reformas menemistas el fundamento de su enfrentamiento con el presidente y de su estrategia de campaña, y otra cosa es que ello sea creíble para el electorado, o que esas diferencias expliquen su éxito interno, que obedeció más bien a los ánimos de la opinión pública y a las condiciones que impuso la competencia intrapartidaria y el marco institucional. Cabe decir, por ello, que si bien el resultado del conflicto por el liderazgo los favoreció, pone en el tapete una situación partidaria e institucional que contradice el espíritu y las expectativas de los duhaldistas. Más que al renacimiento del movimientismo populista del peronismo, estamos asistiendo a la consolidación de su institucionalidad partidaria, en el marco de un sistema de partidos también crecientemente consolidado. Ello no significa que la presencia de una corriente interna de oposición en el partido oficialista no tenga relevancia en la dinámica general del sistema político, sino que su función consiste básicamente en fortalecer la competencia interpartidaria y

la lealtad con las reglas, en vez de debilitarlas, como sucedía en la dinámica movimientista (cuando el peronismo tendía a abarcar todo el escenario político, según muestra Torre), que actúa en calidad de antídoto contra la «estabilización» del partido (Colombo), bloqueando lo que podría ser una «identificación excesiva» con el líder en el gobierno y controlando sus posibles desbordes al ofrecer una alternativa de recambio. Asegura, además, la responsabilidad institucional de la dirigencia partidaria, garantizando su lealtad con las reglas democráticas cuando las elecciones dejan de favorecer a la fuerza y alentando estrategias de largo plazo autónomas de los intereses inmediatos de quienes pueden perder sus cargos a raíz de una derrota. Es así que, aunque se conserve la retórica movimientista, esta competencia entre facciones favorece en la práctica la consolidación institucional. Finalmente, en ésta como en muchas otras ocasiones, cuenta más lo que los actores políticos hacen que lo que creen que hacen.

Alternancia en el horizonte: ¿un gobierno de coalición?

Este proceso relativamente pacífico de sucesión en el peronismo se está dando, también, gracias a los constreñimientos y la «amenaza» que supone la presencia de una oposición, encarnada por la UCR y el Frepaso, que se encuentra en una situación infinitamente mejor, en términos de competitividad, que la condición de fragmentación, inmovilismo y marginalidad que vivieron las fuerzas minoritarias en años pasados o durante otros gobiernos peronistas. Las dificultades que enfrenta, que no son pocas, pueden compensarse con las ventajas que ofrece el contexto de estabilidad a una competencia interpartidaria más abierta, y a la formación de una coalición electoral alternativa. Hoy vemos que la Alianza está actuando con relativo éxito sobre los cuestionamientos y desprendimientos que la coalición oficial padece después de 10 años en el poder; a partir de la experiencia de gobierno acumulada en estos años y de un grado de definición programática que en el pasado no era habitual.

Ciertamente, las fuerzas opositoras enfrentan dificultades para disputar el poder al peronismo, tanto a nivel distrital como nacional. Para el radicalismo, y aun en mayor medida para el Frepaso, los problemas principales provienen de la carencia de una organización partidaria suficientemente dinámica, unificada y extendida por todo el territorio. Las consecuencias de ello se están haciendo sentir en las elecciones para gobernadores que comenzaron en diciembre de 1998 y que continuarán realizándose hasta octubre de 1999: en la primera de ellas la UCR perdió a manos del candidato justicialista su principal bastión histórico, la provincia de Córdoba, y desde entonces el PJ ha demostrado su superioridad en la mayor parte de los distritos (la Alianza logró retener Catamarca y Río Negro, y arrebatarse San Juan, pero el PJ revalidó sus títulos en Salta y Santa Cruz y sumó Tucumán y Tierra del Fuego, gobernados hasta entonces por partidos locales). Este escenario ayudó al peronismo a emparejar fuerzas: fue en diciembre, después de la derrota en Córdoba, que la Alianza cayó en las encuestas cerca de 10 puntos, mien-

tras Duhalde ganaba apoyo entre los indecisos. La crisis originada por la devaluación brasileña agravó el panorama para la oposición pues, como sucedió con la crisis mexicana en 1995, las señales de fragilidad externa alienan las actitudes más conservadoras y pro gubernamentales del electorado.

Es de destacar, sin embargo, que a diferencia de lo que ocurrió en 1995, cuando Menem obtuvo su reelección sobre la base de la memoria aún fresca de la hiperinflación y con el argumento de que solo el peronismo tenía los recursos necesarios para gobernar la crisis, ahora la estabilidad no está en cuestión y tampoco la capacidad de gobierno de la oposición. Desde la formación de la Alianza y la victoria electoral de 1997, dio muestras de poder afrontar los desafíos de la agenda actual, focalizada en los problemas sociales (desocupación, pobreza, inseguridad) y en la calidad de la gestión (corrupción, ineficiencia, etc.). La UCR está dejando atrás una década de frustración y desánimo. Las internas abiertas para dirimir la fórmula aliancista (realizadas en noviembre de 1998) le permitieron al radical De la Rúa, que se impuso por un amplio margen sobre la frepasista Graciela Fernández Meijide, plebiscitar su liderazgo en un amplio sector del electorado, fortaleciendo su carrera presidencial. En cuanto al Frepaso, la participación en la Alianza le ha proporcionado un reconocimiento fundamental para su consolidación, medida tanto en bienes simbólicos para aventar las acusaciones de ser un *flash party*, el «partido de los medios» y una fuerza sin vocación ni recursos básicos para gobernar, así como en espacios políticos concretos, como el de la candidatura a vicepresidente (que recayó en Carlos «Chacho» Alvarez), a la gobernación de tres distritos importantes, y numerosas bancas parlamentarias, algo que debería aprovechar para hacerse efectivamente de los recursos institucionales que hasta hoy no pudo desarrollar.

De hecho, en junio de 1999 se observa un significativo repunte de la oposición: la fórmula aliancista trepó al 39% en la intención de voto, mientras que la del PJ cayó al 29%. En respuesta a ello, Duhalde planteó un acuerdo con Domingo Cavallo, ex-ministro de Economía de Menem que creó su propio partido para candidatearse a la presidencia. Pero los sondeos muestran que un escenario de polarización favorece también a la Alianza (vencería por 46% contra 35% del PJ según MORI). En suma, la formación de la Alianza demuestra que no existen impedimentos para que el actual tripartidismo dé lugar a una competencia bipolar, con una coalición opositora capaz de disputar la presidencia. Es cierto que, en caso de triunfar en las elecciones de octubre, la Alianza se encontraría con un «gobierno dividido» (el PJ retendrá la mayoría en el Senado al menos hasta el 2001), algo que, en su momento, le creó serias dificultades a Alfonsín. Sin embargo, los cambios ocurridos en el país desde entonces (en particular la moderación de los antagonismos, la mayor responsabilización de los actores políticos ante la opinión pública, y la consolidación de la lógica de partidos por sobre la de los movimientos) alienan a esperar que operen en el Parlamento y en otros ámbitos institucionales incentivos para la negociación de las leyes y medidas que el Ejecutivo reclama, así como riesgos y costos para quien intente practicar una oposición sal-

vaje como la que enfrentó el primer presidente de la transición. Un gobierno dividido supone problemas particulares, sin duda, pero no existen motivos para sostener *a priori*, que en este caso serían mayores que los que se observan en otros países latinoamericanos, o incluso en Estados Unidos, donde desde hace décadas casi todos los presidentes han venido acomodándose a tal situación.

Bibliografía

- Colombo, Ariel: «Estatización de los partidos», Buenos Aires, 1991, mimeo.
- Cheresky, Isidoro: «Argentina. Un paso en la consolidación democrática: elecciones presidenciales con alternancia política» en *Revista Mexicana de Sociología* LII(4), 10-12/1990, México.
- Mustapic, Ana María: «El Partido Justicialista. Perspectiva histórica sobre el desarrollo del partido. La estructura del partido», Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1996, mimeo.
- Novaro, Marcos y Vicente Palermo: *Los caminos de la centroizquierda: dilemas y desafíos del Frepaso y de la Alianza*, Losada, Buenos Aires, 1998.
- Palermo, Vicente: «El menemismo, ¿perdurará?» en Aníbal Iturrieta (comp.): *El pensamiento político argentino contemporáneo*, GEL, Buenos Aires, 1994.
- Palermo, Vicente y Marcos Novaro: *Política y poder en el gobierno de Menem*, Norma, Buenos Aires, 1996.
- Torre, Juan Carlos: «El peronismo como solución y como problema», Buenos Aires, 1995, mimeo.